

**CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 140/2022**  
**ACTOR: ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO**  
**SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS**  
**SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD**

En la Ciudad de México, a dos de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta a la **Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, instructora en el presente asunto**, con lo siguiente:

Constancias	Números de registro
1. Oficio <b>CCDMX/PMD/095/2022</b> y anexo de Fausto Manuel Zamorano Esparza, quien se ostenta como Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.	<b>16947</b>
2. Escrito y anexo de Adrián Chávez Dozal, quien se ostenta como Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México.	<b>17308</b>
3. Copia certificada de la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de reclamación <b>148/2022-CA</b> , derivado del presente medio de control constitucional.	---

Las documentales identificadas con los números uno y dos se recibieron los días trece y veinte de octubre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, a través del buzón judicial y la marcada con el número tres se recibió el catorce de diciembre de este año en la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad. Conste.

Ciudad de México, a dos de enero de dos mil veintitrés.

Agréguense al expediente, para que surtan efectos legales, el oficio, el escrito y los anexos de Fausto Manuel Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México y de Adrián Chávez Dozal, Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica del Gobierno de esa entidad federativa, respectivamente, a quienes se tienen por presentados con la personalidad que ostentan<sup>1</sup>, dando contestación a la demanda de la presente controversia constitucional en representación de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad federativa. Además, se les tiene designando delegados, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y ofreciendo como pruebas

**<sup>1</sup> Poder Legislativo de la Ciudad de México.**

De conformidad con la documental que exhibe para tal efecto, y en términos del artículo 32, fracción XXV de la **Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México** que establece:

**Artículo 32.** Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las siguientes:

**XXV.** Representar al Congreso ante toda clase de autoridades administrativas y jurisdiccionales ante la o el Jefe de Gobierno, los partidos políticos registrados y las organizaciones de ciudadanos de la Ciudad; asimismo, podrá otorgar y revocar poderes para pleitos y cobranzas a las y los servidores públicos de las unidades administrativas que por las características de sus funciones estén acordes con la naturaleza de dicho poder; (...).

**Poder Ejecutivo de la Ciudad de México.**

De conformidad con la documental que exhibe para tal efecto y en términos del artículo 230, fracciones I y II del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que establece:

**Artículo 230.** Corresponde a la Dirección General de Servicios Legales:

I. Representar a la Administración Pública en los juicios en que ésta sea parte;

II. Intervenir en los Juicios de Amparo, cuando la persona Titular de la Jefatura de Gobierno tenga el carácter de autoridad responsable, exista solicitud de la autoridad responsable o medie instrucción de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno; así como supervisar todas las etapas de su proceso y la elaboración de los informes previos y justificados cuando la importancia del asunto así lo amerite. Asimismo, intervendrá en los juicios a que se refiere la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (...).

las documentales que acompañan, así como las constancias que refiere el Poder Legislativo de la Ciudad de México en el oficio de cuenta, relacionadas con los antecedentes legislativos de la norma general impugnada, mismas que obran en el expediente de la controversia constitucional 125/2022, esto con apoyo en los artículos 10, fracción II<sup>2</sup>, 11, párrafos primero y segundo<sup>3</sup>, 26, párrafo primero<sup>4</sup>, 31<sup>5</sup> y 32, párrafo primero<sup>6</sup>, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 305<sup>7</sup> del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 1<sup>8</sup> de la citada ley.

Por otra parte, atento a la solicitud de los promoventes, se autoriza a sus delegados hacer uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones y constancias existentes en la presente controversia constitucional, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el trámite en este asunto. Esto a fin de garantizar la adecuada participación de las partes y preservar la eficacia de los derechos fundamentales en el presente medio de control de constitucionalidad y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los

---

<sup>2</sup> **Artículo 10.** (...)

II. Como demandada o demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general, pronunciado el acto o incurrido en la omisión que sea objeto de la controversia; (...).

<sup>3</sup> **Artículo 11.** El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurren a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. (...).

<sup>4</sup> **Artículo 26.** Admitida la demanda, el ministro instructor ordenará emplazar a la parte demandada para que dentro del término de treinta días produzca su contestación, y dará vista a las demás partes para que dentro del mismo plazo manifiesten lo que a su derecho convenga.

<sup>5</sup> **Artículo 31.** Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier caso, corresponderá al ministro instructor desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva.

<sup>6</sup> **Artículo 32.** Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que se haga relación de ella en la propia audiencia y se tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. (...).

<sup>7</sup> **Artículo 305.** Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial.

<sup>8</sup> **Artículo 1.** La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

artículos 6, apartado A, fracción I<sup>9</sup>, y 16, párrafo segundo<sup>10</sup>, de la Constitución federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes.

Se le apercibe que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que pueda dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizado se procederá en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica tanto de las autoridades solicitantes, como de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas sin indicar su naturaleza confidencial o reservada.

En otros términos, intégrese al expediente para que surta efectos legales, la copia certificada de la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de reclamación **148/2022-CA**, derivado de la presente controversia constitucional.

Ahora bien, vista la resolución del recurso de reclamación referido, se advierte de las consideraciones, fundamentos y efectos que la Segunda Sala de este alto tribunal determinó, por mayoría de tres votos, declarar fundando el recurso de reclamación y revocar el acuerdo por el que se admitió la demanda de la presente controversia constitucional:

27. "(...) *Es esencialmente **fundado** el argumento, pues esta Segunda Sala advierte la actualización de una causal de improcedencia que da lugar al sobreseimiento de la controversia principal, atento a lo previsto en el artículo 19, fracciones VIII y IX, en relación con el diverso 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, de la lectura integral de la demanda principal, se desprende que, efectivamente, la **Alcaldía actora carece de interés legítimo, pues no hace valer violaciones a una competencia que tenga directamente reconocida por la Constitución Federal, sino, en todo caso, violaciones indirectas relacionadas a la Constitución de la Ciudad de México y a disposiciones secundarias.***

28. *Para explicar lo anterior, debe señalarse que el último párrafo de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, adicionado con motivo del 'Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación', publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, establece que: **'En las controversias previstas en esta fracción únicamente podrán hacerse valer violaciones a esta Constitución, así como a***

<sup>9</sup> Artículo 6. (...)

**A.** Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. (...).

<sup>10</sup> Artículo 16. (...)

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. (...).

**los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte’.**

29. Asimismo, debe destacarse que el Tribunal Pleno al resolver los recursos de reclamación 150/2019-CA y 158/2019-CA, en sesiones de tres y cinco de diciembre de dos mil diecinueve, respectivamente –antes de la reforma constitucional en cita– sostuvo que **no toda violación constitucional puede analizarse en vía de la controversia constitucional, sino sólo las relacionadas con los principios de división de poderes o con la cláusula federal, delimitando el universo de posibles conflictos a los que versen sobre la invasión, vulneración o simplemente afectación a las esferas competenciales trazadas desde el texto constitucional.**

30. Se dijo que, **si bien el criterio o principio de afectación se ha interpretado en sentido amplio** (esto es, que debe existir un principio de agravio, el cual puede derivar no sólo de una invasión competencial, sino, además, de la afectación a cualquier ámbito que incida en esa esfera regulada directamente desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son las garantías institucionales previstas en su favor o, incluso, prerrogativas relativas a cuestiones presupuestales), **lo cierto es que tal amplitud siempre debe entenderse en el contexto de afectaciones a los ámbitos competenciales.**

31. De esta manera, la precisión de mérito dio lugar a que el Tribunal Pleno identificara como **hipótesis de improcedencia de la controversia constitucional**, las relativas a cuando el actor alegue exclusivamente violaciones relacionadas con: **a) Cláusulas sustantivas, diversas a las competenciales; y b) Cuestiones de estricta legalidad.**

32. Lo anterior se corrobora con la **jurisprudencia P./J. 42/2015 (10a.)**, de rubro: **‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO’.**

33. Cabe destacar que, de manera particular, el Tribunal Pleno al resolver el recurso de reclamación 150/2019-CA, en sesión de tres de diciembre de dos mil diecinueve, precisó que **la materia de estudio en controversias es puramente constitucional**, lo que se traduce en que **es necesario que el actor aduzca una violación directa a una atribución o derecho que le reconozca la Constitución Federal, dejando a un lado todas aquellas violaciones de carácter indirecto**, es decir, en las que se planteen infracciones a disposiciones secundarias, que se traducirían en transgresiones al principio de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, siendo la demanda, en estos últimos casos, notoriamente improcedente.

34. Atento a ello, en la demanda de la controversia principal, la Alcaldía actora impugna el **‘Decreto por el que se abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México’**, publicado en la Gaceta Oficial local el seis de junio de dos mil veintidós y, en la parte conducente para acreditar su interés legítimo, manifiesta lo siguiente: (...).

35. Por su parte, en los conceptos de invalidez que formula en su demanda, la actora principal hace valer, en esencia: (...).

36. De lo anterior, se advierte que la Alcaldía actora insiste en que el acto que impugna en lo principal invade su competencia constitucional, en concreto una afectación a la atribución que, en materia de anuncios, le concede la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 53, numeral 3, inciso a), fracciones XXII y XXVIII, para, respectivamente, vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en esa materia, así como **‘otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, construcciones y edificaciones, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables’.**

37. En específico, se observa que la actora principal se duele de que la Ley que impugna, distribuye competencias entre el Gobierno local y las Alcaldías, dejando a éstas últimas la facultad de verificar y otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios ubicados en vialidades secundarias, cuando, a su parecer, la Constitución de la Ciudad de México le otorga una competencia exclusiva.

38. Atento a ello, de la simple lectura de la demanda se desprende que **las violaciones alegadas por la actora se hacen depender de la transgresión directa a ordenamientos distintos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, y si bien en sus argumentos hace mención a lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, base VI, de la Carta Magna, en tanto que de dicho precepto declara que la administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los Alcaldes, lo cierto es que **de tal norma no se desprende una atribución expresamente reconocida a su favor que pueda ser tutelada en esta instancia constitucional**.

39. En efecto, el artículo 122, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica, en lo conducente: (...).

40. Del precepto constitucional que antecede, se desprende que el Gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías, **cuya integración, organización administrativa y facultades se establecerán en la Constitución Política y leyes locales**; asimismo, **reitera que la Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones**.

41. Atento a ello, como se adelantó, **el artículo 122, apartado A, fracción VI, de la Constitución Federal no establece expresamente una atribución exclusiva en favor de las Alcaldías de la Ciudad de México**, que pueda ser tutelada en la vía de la controversia constitucional prevista en el artículo 105 de ese Magno Ordenamiento, sino que **reserva la distribución de competencias relativa a la Constitución y leyes locales**.

42. Lo anterior es notorio y manifiesto, pues, como se evidencia de la sola lectura de la demanda, **la Alcaldía actora no sustenta una violación directa a un precepto de la Constitución Federal, sino, en todo caso, indirectas a ese Magno Ordenamiento, sustentadas en la Constitución de la Ciudad de México (norma del orden local) y en disposiciones secundarias, como lo es la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración de la propia entidad federativa**.

43. **En todo caso, el planteamiento del actor debía evidenciar una relación entre el acto impugnado y una afectación al ejercicio directo e inmediato a una competencia que le reconozca expresamente la Norma Fundamental**, lo que en el caso no acontece, y aun cuando el actor hace referencia al artículo 122 de la Constitución Federal, ello es insuficiente para hacer procedente la controversia intentada, pues dicho precepto, como se evidenció, no otorga una competencia exclusiva en favor de las Alcaldías a que alude en la demanda, sino, en todo caso, **contiene cláusulas sustantivas (integración, elección, finalidades y principios) las cuales remiten a disposiciones de carácter secundario para la respectiva distribución de competencias, en concreto, la Constitución de la Ciudad de México y leyes locales**.

44. En consecuencia, acorde con lo establecido en el artículo 105 constitucional y los actuales criterios de este Alto Tribunal, **las violaciones indirectas a la Constitución Federal no son de la competencia que tiene esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que, en todo caso, se requiere sustentar un principio de agravio derivado de la violación a una competencia que directamente se encuentre reconocida en esa Carta Magna**.

45. Por tanto, en el caso, se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 19, fracciones VIII y IX, de la Ley Reglamentaria que rige a la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, debido a **que la Alcaldía actora carece de interés legítimo, al no sustentar su demanda en una violación a una competencia directamente reconocida en ese texto fundamental, sino en todo caso, en violaciones indirectas del orden local**.

46. Atento a lo expuesto, esta Segunda Sala determina que, en el caso, fue incorrecto que se admitiera a trámite la demanda de la controversia de la cual deriva este recurso, puesto que su improcedencia resulta de la sola lectura de la demanda, atento a la actualización de las causales previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 19 de la Ley Reglamentaria que rige a las controversias constitucionales, en

relación con el diverso 20, fracción II, de ese propio ordenamiento, de manera que, al resultar **fundado** el presente medio impugnativo, lo procedente es **revocar el auto recurrido y desechar la controversia constitucional**.

47. Refuerza a esta conclusión, el hecho de que, de manera reciente, **esta Segunda Sala ha matizado en diversos precedentes la legitimación de las Alcaldías de la Ciudad de México para efectuar impugnaciones contra actos emitidos por el Gobierno local.**

48. En efecto, al resolver los **recursos de reclamación 121/2021-CA y 123/2021-CA**, en sesión de veintiséis de enero de dos mil veintidós, derivados, respectivamente, de las controversias constitucionales 118/2021 y 119/2021, promovidas por la demarcación territorial Benito Juárez de la Ciudad de México, en contra, respectivamente, del **'Acuerdo de facilidades administrativas para la realización de Proyectos de Construcción en Vías Primarias y de Acceso Controlado en la Ciudad de México'** y del **'Acuerdo de facilidades administrativas para la ejecución inmediata de Proyectos Inmobiliarios para la Construcción de Vivienda, Espacios para la Salud y Escuelas en todos sus niveles'**, publicados en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, **esta Sala observó que la Alcaldía actora carecía de interés legítimo por no sustentar sus demandas iniciales en la violación de una atribución expresamente reconocida por la Constitución Federal.**

49. Criterio que fue reiterado al resolver los **recursos de reclamación 83/2022-CA, 85/2022-CA, 87/2022-CA, 90/2022-CA y 91/2022-CA**, derivados, respectivamente, de las controversias constitucionales 50/2022, 51/2022, 53/2022, 55/2022 y 54/2022, promovidas por las demarcaciones territoriales Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Benito Juárez, Azcapotzalco y Coyoacán, todas de la Ciudad de México, contra el **'Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos Generales para la aplicación de la Evaluación Integral de las personas que ingresen o permanezcan en el Servicio Público de la Administración Pública de la Ciudad de México'**, publicado en la Gaceta Oficial local el veinticuatro de enero de dos mil veintidós.

50. Asimismo, al resolver el **recurso de reclamación 135/2022-CA**, derivado de la **controversia constitucional 125/2022**, en sesión de cinco de octubre de dos mil veintidós, esta Segunda Sala determinó desechar la demanda promovida por la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, contra el **'Decreto por el que se abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México'**, publicado en la Gaceta Oficial local el seis de junio de dos mil veintidós, **al no alegar la violación directa de una competencia directamente trazada desde el texto de la Constitución Federal.**

51. Finalmente, no pasa desapercibido para la conclusión alcanzada, que la Alcaldía promovente de la controversia principal, aduzca para la procedencia de su acción la invalidez decretada de diversos preceptos de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, conforme a lo resuelto por el Tribunal Pleno al fallar la controversia constitucional 282/2019, en sesión de seis de abril de dos mil veintiuno; sin embargo, al acreditarse en el caso la falta de interés legítimo de la Alcaldía actora, ello impide a este Alto Tribunal llevar a cabo el estudio de fondo del asunto, máxime que en el propio engrose del asunto en cita se señaló expresamente en el apartado de efectos que: **'en términos del artículo 105, último párrafo, de la Constitución Federal, el alcance de los efectos se limita únicamente a las partes de esta controversia constitucional, sin que esta sentencia afecte la aplicación de la norma impugnada a los demás sujetos obligados a cumplirla.'**

52. Consideración similar ha sido sustentada por esta Segunda Sala al resolver los recursos de reclamación 15/2022-CA y 16/2022-CA, en los cuales se concluyó el desechamiento de la demanda de controversia constitucional presentada por la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, por falta de oportunidad en su presentación, en la cual impugnó diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, solicitando la aplicación del precedente derivado de la referida controversia constitucional 282/2019.

53. Cabe precisar que en el citado precedente se analizó un tema distinto al que plantea la actora de la controversia principal, relacionado con el principio de titularidad del Alcalde sobre la administración pública que preside, a la luz del artículo 122, apartado A, inciso c), de la Constitución Federal y se observó, en concreto, que resulta inconstitucional la creación de un cuerpo profesional de funcionarios verificadores ajenos a las Alcaldías, pues ello afecta su independencia para elegir a sus funcionarios y, en su caso, ejecutar actos administrativos concretos; en tanto que en la controversia de la cual deriva este recurso, la actora se duele de la distribución competencial hecha en un ordenamiento distinto a la Constitución Federal y no propiamente de la afectación a una atribución o principio expresamente reconocido en ese ordenamiento fundamental.

54. Estas consideraciones no son obligatorias al haberse aprobado por mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz Ahlf y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa (ponente). Los Ministros Luis María Aguilar Morales y Javier Laynez Potisek votaron en contra.

## VI. DECISIÓN

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

**PRIMERO.** Es fundado el recurso de reclamación.

**SEGUNDO.** Se revoca el acuerdo recurrido.

**TERCERO.** Se desecha la controversia constitucional. (...)”

Por tanto, en cumplimiento a lo determinado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se

## ACUERDA

**PRIMERO.** Se revoca el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictado en la presente controversia constitucional.

**SEGUNDO.** De conformidad con el punto **TERCERO** precisado en la sentencia dictada en el recurso de reclamación 148/2022-CA, se desecha la presente controversia constitucional.

**TERCERO.** Archívese el expediente como asunto concluido.

Dada la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, con apoyo en el artículo 282<sup>11</sup> del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este acuerdo.

Finalmente, con apoyo en el considerando artículo noveno<sup>12</sup> del **Acuerdo General 8/2020**, de veintiuno de mayo de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema

<sup>11</sup> **Artículo 282.** El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.

<sup>12</sup> **Artículo 9.** Los acuerdos y las diversas resoluciones se podrán generar electrónicamente con FIREL del ministro presidente o del Ministro instructor, según corresponda, así como del secretario respectivo; sin menoscabo de que puedan firmarse de manera autógrafa y, una vez digitalizados, se integren al expediente respectivo con el uso de la FIREL.

Corte de Justicia de la Nación, intégrese al expediente, para que surta efectos legales, la impresión de la evidencia criptográfica de este acuerdo.

**Notifíquese.** Por lista, por oficio a las partes y mediante MINTERSCJN regulado en el **Acuerdo General 12/2014**, a la Fiscalía General de la República.

Por lo que hace a la notificación de la Fiscalía General de la República, remítase la versión digitalizada del presente acuerdo, por conducto del **MINTERSCJN**, regulado en el **Acuerdo General 12/2014**, para que con apoyo en lo dispuesto en los artículos 4, párrafo primero<sup>13</sup> y 5<sup>14</sup> de la ley reglamentaria, se lleve a cabo la diligencia de notificación a la referida autoridad, en su residencia oficial; en la inteligencia de que la copia digitalizada de este acuerdo, en la que conste la evidencia criptográfica de la firma electrónica del servidor público responsable de su remisión por el MINTERSCJN, hace las veces del **oficio 8109/2022**, por lo que dicha notificación se tendrá por realizada una vez que se haya generado el acuse de envío respectivo en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo proveyó y firma la **Ministra instructora Ana Margarita Ríos Farjat**, quien actúa con la **Maestra Carmina Cortés Rodríguez**, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este alto tribunal, que da fe.

Esta hoja corresponde al acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, dictado por la **Ministra Ana Margarita Ríos Farjat** en la controversia constitucional **140/2022**, promovida por la **Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México**. Conste.

PPG/DVH

<sup>13</sup> **Artículo 4.** Las resoluciones deberán notificarse al día siguiente al en que se hubiesen pronunciado, mediante publicación en lista y por oficio entregado en el domicilio de las partes, por conducto del actuario o mediante correo en pieza certificada con acuse de recibo. En casos urgentes, podrá ordenarse que la notificación se haga por vía telegráfica. (...)

<sup>14</sup> **Artículo 5.** Las partes estarán obligadas a recibir los oficios de notificación que se les dirijan a sus oficinas, domicilio o lugar en que se encuentren. En caso de que las notificaciones se hagan por conducto de actuario, se hará constar el nombre de la persona con quien se entienda la diligencia y si se negare a firmar el acta o a recibir el oficio, la notificación se tendrá por legalmente hecha.



**CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 140/2022**

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: Acuerdo.docx

Identificador de proceso de firma: 180785

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre	ANA MARGARITA RIOS FARJAT	Estado del certificado	OK	Vigente	
	CURP	RIFA730913MNLSTN08				
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6673636a6e000000000000000000000000019d5	Revocación	OK	No revocado	
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	03/01/2023T00:05:11Z / 02/01/2023T18:05:11-06:00	Estatus firma	OK	Valida	
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION				
	Cadena de firma	67 e4 28 6a a1 35 d0 e4 8f 7e 72 d4 f7 8c 45 00 1e 9b fe 3b 9e af 83 13 f2 27 c9 cb 67 0c 29 92 b7 62 90 a2 23 d4 65 36 a5 5a 3e 82 c6 d9 0c 35 75 25 ce 8e 18 71 f3 5f c3 02 da 25 cf e3 00 7e 03 9e e0 5a 55 24 6c 81 3d 21 6f 1c c0 45 6d 92 f2 b4 d9 54 ec 8e 39 1f f0 4c 73 90 f0 30 b0 7b a7 6f 10 16 ef 56 32 5a ba 09 53 75 16 3b 31 c4 38 09 38 9d ed b7 fa 3b ef a0 f1 0a f9 62 86 21 62 25 85 a7 67 1b bb 4c f8 13 f2 6d 65 fd ee 69 ae 63 84 7d bc 40 e9 04 76 16 d4 4a d6 18 45 0b 30 c0 8e da b2 19 9b 83 16 f7 04 c4 4e 92 c5 19 c9 a8 02 9a e8 77 01 69 bb 57 eb 42 c1 aa a9 50 6b 85 d9 14 6b 97 6c c9 cf 52 83 b0 f6 4f 03 01 54 5b 68 08 8a 58 9b 85 0b 6f 4a ca b9 0b a5 62 be ab 77 51 4a 04 dd 1e ca b3 1a 60 c5 bc 18 8e 92 2f b2 44 c1 af 0d 73 b9 e4 59 11 3f 0d 99 4d				
	Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	03/01/2023T00:05:11Z / 02/01/2023T18:05:11-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
	Emisor del certificado de OCSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
	Número de serie del certificado OCSP	706a6673636a6e000000000000000000000000019d5				
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	03/01/2023T00:05:11Z / 02/01/2023T18:05:11-06:00				
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
	Emisor del certificado TSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
	Identificador de la secuencia	5358489				
	Datos estampillados	388202257E8DDDB3E9F2F8333C58D72F989037D3FB02EE943764B9A812151D65				

Firmante	Nombre	CARMINA CORTES RODRIGUEZ	Estado del certificado	OK	Vigente	
	CURP	CORC710405MDFRDR08				
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6673636a6e00000000000000000000000001b62	Revocación	OK	No revocado	
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	02/01/2023T17:52:26Z / 02/01/2023T11:52:26-06:00	Estatus firma	OK	Valida	
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION				
	Cadena de firma	b2 fc 71 a3 33 59 1d 7e 2b 57 c4 e1 46 38 19 19 47 ce 96 9f 73 ef 4e 6d 24 e0 8c 9c 77 85 50 b1 e6 cf 62 df af 38 75 d0 bb 7a ca ed cc 09 a4 ff b7 3f b3 9c d9 31 5a 39 3d c8 39 fe 5a 68 6b 17 70 da b7 79 bb 59 bc 0d ef 62 d9 b2 50 b3 bd 15 8a 4e de ac ab 5a 3c ab ed 3a 49 42 4b 24 c7 66 72 7c 81 d7 64 70 dd 1d e8 a7 f4 5b 70 bb 05 ea e2 96 82 22 72 25 ba fb 4c bc 11 ee 2c eb fb c8 95 2c 46 74 cc 5d 9a 22 b1 db 49 7d d0 cd c3 8b ad bc ca 76 e9 18 6b 4a 67 f2 ec e6 38 6b 4c 12 fb 63 9d c9 0e 1c 5c 82 4c 9a 2e 10 c4 50 8c 0a 6c 98 06 21 2d 10 45 e0 05 e4 c6 4c 51 12 4f 73 0d cf fa fc 73 79 8b 01 d5 0c 65 00 54 88 61 8f eb 61 a0 56 7c dd 8f 34 7e 90 ac 8a 8e 07 63 26 f7 4d 72 96 b8 4c ac 81 59 a2 8f 95 5a a8 32 23 b9 57 5c 84 fa 21 da e7 ec 2c bd ea b9 9a 36 81				
	Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	02/01/2023T17:52:26Z / 02/01/2023T11:52:26-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
	Emisor del certificado de OCSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
	Número de serie del certificado OCSP	706a6673636a6e00000000000000000000000001b62				
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	02/01/2023T17:52:26Z / 02/01/2023T11:52:26-06:00				
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
	Emisor del certificado TSP	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación				
	Identificador de la secuencia	5356188				
	Datos estampillados	66FA1F18B463CD0CF6DE67C6E3733DE7A2676473A3410607A0056B14A2BA7683				